Panamá, 6 de febrero de 2006.

**Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción.**

**Contestación de la
Demanda.**

El licenciado Rogelio Gálvez, en representación de **UNIVERSAL FINANCIAL INVESTMENT GROUP S.A.**, para que se declare nula, por ilegal la Resolución S.B. 08- 2005 de 20 de enero de 2005, dictada por la Superintendente de Bancos, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Señor Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Acudo ante ese Honorable Tribunal de Justicia, con la finalidad de contestar la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, descrita en el margen superior del presente escrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, numeral 2 de la Ley 38 de 2000.

I. Contestación de los hechos de la demanda:

Primero: No es cierto como se expone; por tanto, se niega.

Segundo: Es cierto; por tanto, se acepta.

Tercero: No es cierto como se expone; por tanto, se niega.

Cuarto: No es un hecho; por tanto, se niega.

Quinto: No es un hecho; por tanto se niega.

Sexto: No es cierto como se expone; por tanto se niega.

Séptimo: No es un hecho; por tanto se niega.

II. Disposición que se aduce infringida y el concepto de la supuesta violación:

El apoderado judicial de la empresa demandante aduce que la Resolución 08-2005 de 20 de enero de 2005, dictada por la Superintendencia de Bancos, infringe el artículo 871 del Código Judicial, que se refiere a la valoración de los documentos privados emanados de terceros, por parte del juzgador.

Al explicar el concepto de la violación, aduce que se produce en forma directa por omisión o falta de aplicación, toda vez que la Superintendente de Bancos no aplicó la disposición legal que guardaba relación directa con la valoración de un medio probatorio, en este caso, con documentos como la nota del representante legal de MIDLAND SERVICES, INC., que sirvieron de sustento para multar a la empresa UNIVERSAL FINANCIAL INVESTMENT GROUP S.A. y a la SOCIEDAD DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA MI TECHO S.A.

III. Descargos de la Procuraduría de la Administración en representación de la Superintendencia de Bancos.

Se encuentra acreditado en el proceso que mediante Resolución Núm. 77-2003 de 14 de julio de 2003, la Superintendencia de Bancos, acogió la denuncia presentada por LAT CARIB INVESTMENT S.A., en contra de las sociedades FINANCIAL INVESTMENT GROUP S.A., SOCIEDAD DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA MI TECHO S.A., y PANAMERICAN HOLDING INTERNATIONAL S.A., por dedicarse a actividades propias del Negocio de Banca, a través de la sociedad

TEMPUS BANK, la cual no se encuentra inscrita en la República de Panamá y no está autorizada para desarrollar esa actividad.

Además se ordenó inspeccionar los libros, cuentas y documentos de las sociedades investigadas y de las empresas relacionadas con éstas, con fundamento en el artículo 25 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, que es del tenor siguiente:

"ARTICULO 25. EJERCICIO DEL NEGOCIO DE BANCA SIN LICENCIA. Siempre que se tenga conocimiento o razones fundadas para creer que una persona natural o jurídica está ejerciendo el Negocio de Banca sin licencia, la Superintendencia estará facultada para examinar sus libros, cuentas y documentos a fin de determinar tal hecho. Toda negativa injustificada a presentar dichos libros, cuentas y documentos se considerará como presunción del hecho de ejercer el Negocio de Banca sin licencia. La Superintendencia deberá imponer multa de hasta cien mil balboas (B/.100.000.00) a las personas naturales o jurídicas que violen las disposiciones de este artículo.
..."

Las constancias procesales demuestran que mediante Resolución 115-2003 de 27 de octubre de 2003, la Superintendencia de Bancos, formuló cargos en contra de UNIVERSAL FINANCIAL INVESTMENT GROUP S.A., SOCIEDAD DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA MI TECHO S.A., y PANAMERICAN HOLDING INTERNATIONAL S.A., al comprobar que se dedicaban al Negocio de Banca, a través de la sociedad TEMPUS BANK S.A., sin tener licencia para operar en la República de Panamá, lo cual infringe el Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998.

Mediante Resolución 08-2004 de 18 de febrero de 2004, la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, resolvió el recurso de apelación presentado por el apoderado legal de las sociedades denunciadas e instó a la Superintendente a realizar todas las investigaciones necesarias en ese caso y otros, donde se atente contra el prestigio y seriedad del Centro Bancario Panameño, a fin de evitar el uso indebido de la palabra Banco y el ejercicio del negocio de Banca sin la licencia correspondiente.

De la investigación realizada por la Superintendencia de Bancos se determinó que las sociedades denunciadas mantenían estrecha relación y nombres en común de sus directores, dignatarios y personal, además que se constató que utilizaron el nombre TEMPUS BANK frente a sus clientes, infringiendo el artículo 24 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, que a la letra establece:

"ARTICULO 24. USO DE LA PALABRA "BANCO". Con la excepción de instituciones o agrupaciones de carácter nacional que se dediquen exclusivamente a actividades de tipo humanitario o caritativo, o de entidades estatales que se dediquen a efectuar préstamos sectoriales de interés social, ninguna persona que no sea un Banco autorizado podrá, sin licencia de la Comisión Bancaria Nacional o de la Superintendencia, según sea el caso, emplear la palabra "Banco" ni sus derivados, en ningún idioma, en su nombre, razón social, descripción o denominación en membretes de facturas, papel de cartas, avisos, anuncios o por cualquier otro medio o en cualquier otra forma que indique que ejerce el Negocio de Banca.
..."

En consecuencia, mediante Resolución 08-2005 de 20 de enero de 2005, la Superintendente de Bancos sancionó con multa de Diez Mil Balboas (B/.10.000.00) a las sociedades UNIVERSAL FINANCIAL INVESTMENT GROUP S.A., y a la SOCIEDAD DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA MI TECHO S.A., por utilizar la palabra "Banco", sin estar autorizada para ello, lo cual se comprobó al verificar que habían efectuado anuncios y presentado documentos en representación, agencia o promoción de TEMPUS BANK.

El cargo de ilegalidad aducido por la parte actora, merece ser desestimado, ya que lo dispuesto en el artículo 871 del Código Judicial no es aplicable al caso que nos ocupa, toda vez que el examen de pruebas para la verificación de los hechos que constituyan infracciones al Decreto Ley 9 de 1998, no está sujeto a los criterios de validez de documentos del Código Judicial.

Esto se reafirma en el contenido del artículo 25 del Decreto Ley 9 de 1998, que es la ley especial aplicable, cuando se le exige a la Superintendencia como requisito para el examen de documentación, simplemente, tener conocimiento de alguna situación o, bien, razones fundadas para creer que una persona está ejerciendo el negocio de banca sin licencia.

Además de lo expuesto, es preciso recalcar que los documentos de la empresa MIDLAND SERVICE INC. y los aportados por la sociedad LAT CARIB INVESTMENT S.A., no fueron los únicos elementos valorados por la

Administración para sustentar la sanción impuesta a la sociedad demandante, pues existían otras denuncias, documentos e inclusive noticias acreditadas en el expediente administrativo, referentes a las actividades del TEMPUS BANK, en la República de Panamá, sin tener licencia para ello.

Las constancias procesales demuestran que pese a que la empresa LAT CARIB INVESTMENT S.A., desistió de la denuncia presentada, la Superintendencia de Bancos, continuó de oficio el proceso administrativo, por la gravedad de los hechos denunciados y por afectar el interés general, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 160 de la Ley 38 de 2000, que a la letra establece:

"Artículo 160. La administración aceptará de plano el desistimiento siempre que éste sea viable, o la renuncia, y declarará concluido el proceso, salvo que, habiéndose apersonado terceros interesados, insten su continuación dentro del plazo de diez días, contado a partir de la fecha en que fueron notificados del desistimiento o la renuncia. Si la cuestión suscitada entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y seguirá el procedimiento." (El subrayado es nuestro)

Por lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los señores Magistrados, se sirvan declarar que NO ES ILEGAL la Resolución 08-2005 de 20 de enero de 2005, emitida por la Superintendente de Bancos.

IV. Pruebas:

Aceptamos las presentadas en originales o en copias que se encuentren debidamente autenticadas.

Aducimos el expediente administrativo relacionado con este proceso, que debe ser solicitado a la Superintendente de Bancos.

V. Derecho:

Negamos el invocado por la demandante.

Del Señor Magistrado Presidente,

Oscar Ceville
Procurador de la Administración.

Alina Vergara de Chérigo
Secretaria General, a. i.

OC/4/iv.